



TONIA ETXARRI

## ESPERANDO A RAJOY

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tendrá hoy una oportunidad de oro para pronunciarse sobre las líneas rojas de la política penitenciaria

del PP sobre los presupuestos de las comunidades autónomas, que es donde están empleados todos los protagonistas políticos del resto de España, se centra, cómo no, en los efectos del fin de la actividad de ETA que sigue sin disolverse. Si los amigos de los presos de ETA reclaman al nuevo Ejecutivo que se cumpla la ley, seguramente el presidente no podrá estar más de acuerdo con ellos. ¡Que se cumpla! Habrá, pues, que determinar qué entiende cada cual por el cumplimiento requerido.

Hoy el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que participará en la toma de posesión como delegado del gobierno en el País vasco de Carlos Urquijo, tendrá

una oportunidad de oro para explicar si, en su opinión y desde su responsabilidad, la retirada de la 'doctrina Parot', como exigen los amigos de los presos, y en ese punto les apoya el PNV, no implicaría una vulneración de la legalidad. Por ejemplo. La 'doctrina Parot', que actualmente está en revisión en el Tribunal Constitucional, es fruto de una sentencia del Supremo de 2006, que modificó el mecanismo para la aplicación de las reducciones de las penas. Garantiza que los autores de delitos de especial gravedad permanezcan en prisión el tiempo máximo de cumplimiento de sus condenas fijado en el Código Penal.

Que los reclusos tienen que

cumplir sus penas es una apreciación que suscribe cualquier gobierno democrático. El anterior y el nuevo. Por eso, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, puntualizaba ayer que los presos de ETA, «si quieren de forma individual acogerse a los beneficios penitenciarios», deberán recorrer el camino de la reinserción.

Los dirigentes de la izquierda abertzale hablan de pasos. Porque les interesa hablar de dos partes y de dos bandos. No estamos en guerra, por mucho que insista la propaganda en justificar los desmanes provocados en nombre de un conflicto. Tampoco es un problema de movimientos. No estamos ante un tablero de ajedrez en torno al cual dos jugadores en igualdad de condiciones van alternando sus estrategias. Es cierto que los herederos de Batasuna han dado pasos. Pero les falta dar el definitivo. El que le ha reclamado la sociedad tantas veces, con manifestaciones tan masivas como la suya del sábado: la disolución de ETA. Por lo tanto, todavía queda mucho camino por recorrer.

El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, visitará Euskadi el día 24 en su primera salida oficial para escenificar que su prioridad se dirige hacia el fin del terrorismo y reunirse, después de hacerlo con Antonio Basagoiti, con altos representantes del Ejecutivo autónomo. A sus predece-

sores en el cargo les correspondió enfrentarse a la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento del Estado de Derecho; asistir a los funerales y consolar a la víctimas. El nuevo ministro tiene una tarea distinta, pero no menos compleja y trascendental para el futuro y el vigor de la democracia. Como errar el círculo de la violencia sin impunidad, con inteligencia y con piedad.

El debate ya está abierto en canal y hay que esperar un torrente de opiniones, pronósticos, diagnósticos y 'consejos' desde todos los flancos. El abogado nacionalista Txema Montero declaró a EL CORREO que la Guardia Civil ha sido el instrumento más efectivo de la lucha contra ETA, lo que no deja de ser un diagnóstico certero aunque incómodo para los nacionalistas porque encierra la convicción de que la organización terrorista no ha sido derrotada por la sociedad, por la política y por la moral ciudadana sino por la fuerza policial. Y precisamente el final de la pesadilla y la manera en que se logre, determinarán y condicionarán el futuro en libertad para todos los ciudadanos. No parece que ahora el camino más adecuado sea poner a manifestantes en la calle como un escenario para reclamar la impunidad como si fuera un derecho. Esto va de otra cosa. Y Rajoy, cuando aparezca, tendrá que rubricar lo que van avanzando ya sus ministros.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha visto muchas fotografías de manifestaciones masivas como la celebrada el sábado en Bilbao en favor de los presos. Muchas. Porque demostraciones numerosas en este país, durante los últimos treinta años, se han dado hasta la saciedad. El aparato de propaganda de la izquierda abertzale tiene la maquinaria muy engrasada. Pero la condena y la resistencia a ETA también convocó año tras año a riadas de ciudadanos en la calle. En algunas participó él mismo, al lado de las víctimas del terrorismo, para exigir el fin de las amenazas y la disolución de la banda. Por lo tanto, el número de manifestantes que han reclamado el acercamiento de los presos de ETA no parece que vaya a impresionar al nuevo inquilino de La Moncloa.

El problema no es de cantidad sino de calidad. ¿Qué quieren? ¿Que se cumpla la ley? El problema radica en el contenido del concepto. Los convocantes de la marcha y algunos líderes de la izquierda abertzale que siguen empecinados en hablar de «presos políticos» al referirse a quienes están encarcelados por haber atentado contra vidas y bienes, quieren seguir jaleando la polémica en torno a su causa. El debate contaminado en Euskadi, lejos de pasar, por ejemplo, por el control previo que quiere llevar a cabo el nuevo Gobierno